

1.6. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CASTILLA-LA MANCHA

(pp. 2-17)

—

1.6. DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CASTELLA-LA MANXA (pp.

18-32)

NURIA MARÍA GARRIDO CUENCA

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universidad de Castilla-La Mancha

Sumario: 1. Panorámica y valoración general: a vueltas con las polémicas sobre las obras de vertidos, las actuaciones de revalorización de la sostenibilidad del medio rural y el nuevo horizonte abierto a Castilla-La Mancha en materia de política hidráulica, ¿falacia, ficción o realidad? 2. Planificación de la ordenación de recursos naturales e iniciación de los procedimientos para la declaración de nuevos parques naturales y monumentos naturales 3. Novedades organizativas en la Administración hidráulica autonómica y en la Administración ambiental. 3.1. La aprobación del Estatuto de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. A. Funciones de defensa y fomento del uso sostenible de los recursos hídricos autonómicos. B. Estructura orgánica de la Agencia del Agua: la reiteración del modelo clásico. 3.2. Supresión del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, ¿una medida de racionalización del gasto público o el punto y final de una agonía anunciada? 3.3. La modificación de los Estatutos del consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana; 4. Actuaciones para el desarrollo sostenible del medio rural. 5. Medidas de fomento en materia de conservación de espacios naturales.

1. Panorámica y valoración general: a vueltas con las polémicas sobre las obras de vertidos, las actuaciones de revalorización de la sostenibilidad del medio rural y el nuevo horizonte abierto en Castilla-La Mancha en materia de política hidráulica, ¿falacia, ficción o realidad?

Durante el período analizado no han sido muchas las novedades normativas, pero sí alguna de relevancia singular, como la aprobación de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha o la declaración de monumentos naturales y la aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales del Valle de Alcudia, Sierra Madrona y Sierra Norte de Guadalajara, con la consiguiente iniciación del procedimiento para la declaración de los parques naturales afectados.

Desde el punto de vista organizativo, y como ya anunciábamos en la crónica anterior, los malos augurios respecto al Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha se han visto cumplidos con su extinción en junio de este año, la totalidad de cuyos fines y objetivos han pasado a ser asumidos por la nueva Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Asimismo, ha sido modificado, fundamentalmente en aspectos estructurales, el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de 15 de febrero de 2008, por el que se creó el Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana y se aprobaron sus Estatutos.

Entre las actuaciones de fomento, han sido también publicadas en este espacio temporal las convocatorias de importantes subvenciones destinadas al fomento, la conservación o el aprovechamiento de actuaciones de apoyo a la conservación de áreas naturales.

Como no podía ser menos, algunas iniciativas políticas de sonada repercusión ambiental se han visto envueltas en una controvertida discusión mediática y el anuncio de acciones judiciales por parte de colectivos ecologistas regionales, destacando: la declaración de impacto ambiental del proyecto de autovía Toledo-Ciudad Real, la cementera de la Parrilla en Cuenca, o la paralización de las obras del vertedero de Toledo.

En fin, desde la Consejería se sigue avanzando en el borrador de la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 2010-2012, con un horizonte 2020, pendiente de su ratificación por el Consejo Regional del Clima. A principios de noviembre se han incorporado al Pacto contra el Cambio Climático de Castilla-La Mancha, firmado en octubre del 2009, la Asociación de los Centros de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (CEDERCAM) y, a través de ella, los grupos de desarrollo rural de nuestra región. Con esta incorporación son ya veintisiete las entidades adheridas al Pacto, entre las que se encuentran 18 instituciones u organizaciones, 3 ayuntamientos y 5 entidades empresariales. Dados los ambiciosos objetivos del Plan regional —de los que se dio cuenta en la anterior crónica—, la adhesión de este nuevo colectivo resulta esencial, a causa de la enorme repercusión en el medio rural de las medidas estratégicas frente al cambio climático. Lo que, además, y a juicio del Gobierno regional, revertirá indudablemente en beneficios para la mejora de la calidad de vida de los municipios. No está de más recordar que de las 300 medidas de la Estrategia, más de la mitad tendrán una incidencia positiva en la economía rural castellano-manchega, pues 50 medidas son específicas para la agricultura, 41 para la ganadería y 31 para el sector forestal y el cinegético, los espacios protegidos y la biodiversidad; otras 50 se relacionan con la gestión de residuos, 26 con la vivienda y el urbanismo, 11 con el turismo y 12 con la salud ambiental.

En directa relación con esta cuestión, según informa el Gobierno regional en su página web, se están ultimando los convenios para la aplicación de la Ley estatal de Desarrollo Rural Sostenible en las zonas rurales a revitalizar, habiendo concluido en octubre el plazo fijado por el Ministerio de Medio Ambiente para estas actuaciones. Según las fuentes oficiales, el Gobierno de Castilla-La Mancha dará prioridad a zonas como el Parque Natural del Alto Tajo o la Serranía de Cuenca, de acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha, que,

aprobado paralelamente a la Ley estatal, dividió en 29 comarcas las áreas de actuación impuestas por la norma básica. Con toda una serie de “programas horizontales” para la práctica totalidad de las comarcas, destacan los de apoyo al transporte público, los de fomento de proyectos generadores de actividad económica en el aprovechamiento energético de la biomasa forestal y los de apoyo al turismo vinculado al patrimonio natural. Con ello, la actuación autonómica pretende acercarse al fin nuclear de una ley que pretende conciliar economía, desarrollo y sostenibilidad en el ámbito rural. En este sentido, destaca la aprobación y publicación de la Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de Protocolo general con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo sostenible del medio rural, que constituye el marco general de actuación y concreción de las políticas autonómicas que resultan de la Ley básica estatal.

Y ya para concluir, debe destacarse el papel que le toca jugar a la Comunidad Autónoma en el actual proceso de elaboración de los planes de cuenca de los ríos que trascurren por nuestro territorio. Aunque no son todavía muchas las noticias y hará falta un estudio más detenido cuando el proceso culmine, el actual borrador del Plan de Cuenca del Tajo parece un buen documento de partida al recoger algunos de los planteamientos de la política hídrica defendida por el Gobierno regional, entre ellos: el incremento del caudal ecológico del río Tajo o el mantenimiento de láminas permanentes de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, que tanto afectaron en su día al desarrollo económico de las zonas limítrofes. El documento ha sido objeto de severas críticas por parte del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que, haciendo visibles las voces de los regantes del Levante español, manifiesta su empeño en conservar la inercia del uso tradicional de los ríos sin buscar las alternativas que garanticen otros sistemas de suministro, lo que impide a otras comunidades autónomas, especialmente la nuestra, la utilización del agua para el desarrollo económico y social vedado durante tantos años.

Quizás pueda resultar significativo de que algo en materia de aguas se mueve a favor de nuestra autonomía el anuncio público de la futura fusión de las sociedades públicas de aguas Hidroguadiana, Aguas de la Cuenca del Tajo y Aguas de la Cuenca del Guadalquivir en una nueva sociedad que se constituirá antes de finales de diciembre del

2010 con el nombre de Aguas de la Cuenca del Sur, habiéndose llegado al acuerdo de constituir su sede en Toledo.

2. Planificación de la ordenación de recursos naturales e iniciación de los procedimientos para la declaración de nuevos parques naturales y monumentos naturales

En este período han sido aprobados dos planes de ordenación de los recursos naturales y se ha iniciado el procedimiento para la declaración de los parques naturales incluidos. Ello se ha producido mediante los decretos 214/2010 y 215/2010, de 28 de septiembre (*DOCM* de 5 de octubre de 2010), por los que se aprueban, respectivamente, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara, y que inician el procedimiento para la declaración de parque natural de ambos espacios. Todo ello de acuerdo con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, lo que conlleva la aplicación del régimen de protección preventiva previsto en esta norma para todas las actividades contempladas en el Plan que no hayan sido calificadas expresamente como “compatibles”, y la aplicación del régimen sancionador específicamente previsto. Asimismo, el Decreto 214/2010 otorga la declaración de espacio protegido al Monumento Natural del Volcán de Alhorín y a la Reserva Fluvial del Río Guadalmez, con lo que se completa de este modo la práctica totalidad de los espacios protegidos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Por otro lado, el Decreto 224/2010, de 26 de octubre (*DOCM* de 29 de octubre de 2010), declara monumento natural, por reunir las características previstas en el artículo 45 de la Ley autonómica 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, el espacio natural sito en la provincia de Toledo (términos municipales de Albarreal de Tajo, Burujón y La Puebla de Montalbán) denominado Barrancas de Castrejón y Calaña. El Decreto justifica esta declaración por su indudable valor paisajístico (singular ejemplo del paisaje de incisión del río Tajo) y su importancia zoológica, de

modo que la importancia de los hábitats y las especies de la zona ha motivado la inclusión de la mayor parte del conjunto dentro del territorio regional de la Red Natura 2000, formando parte de la ZEPA y el LIC Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután. La norma, de acuerdo con las exigencias de la Ley 9/1999, establece el marco normativo preciso para otorgar una atención preferente a la conservación de los valores ecológicos, geológicos y científicos de la zona, lo que supone fundamentalmente establecer el régimen de usos, aprovechamientos y actividades (art. 3), determinar su régimen de administración y gestión —que corresponderá a la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad— (art. 5) y clasificar los instrumentos de planificación urbanística de la superficie afectada por el monumento natural como “suelo rústico de protección natural” (art. 4). Expresamente las disposiciones adicionales primera y segunda establecen como actividad prioritaria en la gestión del espacio protegido la sustitución de los postes de tendido eléctricos por otros de diseño inocuo que eviten el peligro de electrocución de la avifauna, y obligan además a la minimización de la afectación paisajística del entorno en los diferentes trámites de informe o evaluación ambiental de planes y proyectos, lo que supone una novedad resaltable en este tipo de normas de protección ambiental de espacios protegidos.

Aunque no se trate expresamente de un espacio natural protegido, pero dado el indudable valor ambiental que presenta, nos ha parecido oportuno dar noticia del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 15 de septiembre de 2010, para la ejecución del proyecto de clasificación, deslinde, amojonamiento y señalización de la denominada Cañada Real de la Plata, en su trayecto por la provincia de Ciudad Real, y de la Cañada Real de Zaragoza a Andalucía, a su paso por la provincia de Guadalajara, publicado mediante Resolución de 19 de octubre de 2010 (*DOCM* de 2 de noviembre de 2010). Este convenio, del que la cláusula séptima predica expresamente su naturaleza administrativa, encuentra su fundamento normativo en la Ley básica 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y en el desarrollo autonómico mediante la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Así, en un ámbito de colaboración y aunando esfuerzos, este convenio y las actuaciones que conlleva suponen la ampliación del ámbito de las vías pecuarias colindantes (Cañada Real Soriana Oriental

y Real Conquense), al implementar los programas de determinación física de las vías pecuarias que forman parte de la Red Nacional y la revalorización de los tradicionales itinerarios ganaderos también desde la perspectiva natural, cultural y recreativa, y al potenciar las nuevas posibilidades que ha ido autorizando la normativa vigente. Este convenio fija taxativamente los respectivos compromisos de las partes (cláusula segunda), las obligaciones económicas (tercera) y su duración (hasta el 31 de diciembre de 2014), y constituye una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por cinco miembros, dos en representación de la DG de Medio Natural y Política Forestal, dos en representación de la DG de Política Forestal y uno en representación de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

3. Novedades organizativas en la Administración hidráulica autonómica y en la Administración ambiental

3.1. La aprobación del Estatuto de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

Tal como se informó en la crónica precedente, la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, creó la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha como organismo autónomo adscrito al órgano de gobierno responsable de la coordinación hidrológica, de forma que se constituyó la Administración hidráulica autonómica para el ejercicio de las competencias actuales y futuras en materia de aguas en el ámbito de la Comunidad. Con esta medida organizativa se sigue el camino iniciado por otras autonomías en la constitución de sus propias administraciones del agua, que conviven para la gestión de los intereses propios con la Administración hidráulica estatal, cuyo exponente primero son las confederaciones hidrográficas.

Tal como imponía la Ley, se ha procedido al desarrollo normativo de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha mediante Decreto 179/2010, de 1 de julio (*DOCM* de 6 de julio de 2010). La norma de la Agencia, similar en cuanto a la definición, la estructura, los contenidos y los fines a las del resto de organismos autonómicos que la han precedido —por más que entre ellos existan notables diferencias—, recoge como capítulos esenciales: las funciones y potestades (capítulo I), la organización (capítulo II, que constituye el grueso del Decreto) y el régimen jurídico, económico-financiero,

patrimonial y de personal (capítulo III), de naturaleza jurídico-administrativa y acorde con la modalidad jurídica de la que se ha decidido dotar a nuestra administración hidráulica como organismo autónomo, una de las principales notas diferenciadoras respecto a otras administraciones autonómicas del agua.

A. Funciones de defensa y fomento del uso sostenible de los recursos hídricos autonómicos

Recordemos que la decisiva apuesta por la creación de este organismo se justificaba en el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua, tanto en cuanto a la integración de la política hidráulica en el resto de políticas sectoriales, como en la exigencia del uso sostenible, responsable y eficiente del recurso. Estos objetivos se concretaron para nuestro nuevo ente autónomo en: 1) conseguir una política activa de uso sostenible del agua, mediante la programación, aprobación, ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas; 2) defender y proteger los recursos hídricos en coordinación con el resto de organismos y administraciones públicas; y 3) contribuir a la ordenación del territorio, partiendo de la consideración del agua como elemento dinamizador del progreso y el desarrollo económico y social, compatibilizándolo con la protección del medio ambiente.

Dada la consideración del agua como recurso fundamentalmente caracterizado por su valor ecológico y ambiental, las funciones de la Agencia reflejan la relevancia de este recurso natural en el prolijo artículo 4 del Decreto, y, de modo sintético, se refieren a: el ejercicio de competencias en materia de obras hidráulicas, la ordenación y protección de los recursos hídricos autonómicos, la participación en la planificación, la coordinación con el resto de órganos competentes en materia de aguas (autonómicos o estatales), el régimen demanial, la inspección y el control, y la participación orgánica y funcional en la Administración hidráulica estatal. Explícitamente, las competencias relacionadas con el carácter y uso sostenible del agua son las siguientes:

- a) Programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo en todo caso las relativas a

abastecimiento, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de márgenes de los ríos y aprovechamientos hidráulicos en general.

- b) Programación, promoción y aprobación de regadíos y de las obras hidráulicas necesarias.
- c) Propuesta y aprobación inicial del Plan Director de Abastecimiento de Agua y del Plan de Depuración de Aguas Residuales Urbanas.
- d) Desarrollo de programas, ordenación y protección de los recursos hídricos de competencia autonómica.
- e) Participación en la planificación, ordenación y protección de los recursos hídricos que afecten a la Comunidad Autónoma, incluida la reutilización de aguas residuales depuradas para cualquier uso, en coordinación con la planificación hidrológica del Estado, en el marco de la legislación de aguas vigente.
- f) Confección de una base de datos de los aprovechamientos de las aguas subterráneas y superficiales que afecten a la Comunidad Autónoma.
- g) Ejercicio de funciones de inspección y control del abastecimiento, el saneamiento y la depuración, en particular las relativas a los caudales circulantes y a la vigilancia y el control de los vertidos, la contaminación y la calidad de las aguas.
- h) Fomento de las actividades públicas y privadas dirigidas a un uso más racional de los recursos hidráulicos de la región, incluida la gestión de ayudas y subvenciones en la materia.

B. Estructura orgánica de la Agencia del Agua: la reiteración del modelo clásico

En cuanto a su estructura orgánica, no encontramos novedades relevantes que la singularicen respecto a otras agencias autonómicas creadas con anterioridad. En su organización interna se concitan los distintos intereses implicados, exigencia impuesta por lo demás en la legislación estatal de aguas: Administración regional y provincial y,

de modo esencial, los interesados y usuarios. Son tres los niveles generales de organización de la Agencia:

- a) Órganos de gobierno, que concretan la estructura regional con tres órganos: Presidencia, Consejo de Administración (como órgano superior de planificación y programación) y Dirección-Gerencia.
- b) Descentralización local: servicios provinciales para el desempeño de sus funciones en este ámbito territorial, que según los Estatutos representarán a la Agencia en su correspondiente ámbito territorial mediante las personas titulares de las delegaciones provinciales del órgano del Consejo de Gobierno responsable de la coordinación hidrológica (art. 6.2).
- c) Un órgano consultivo y de participación en materia de agua que, bajo la denominación de Consejo Consultivo del Agua de Castilla-La Mancha, estará integrado por representantes de la Administración regional y local, de los usuarios de todas las demarcaciones hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha (de abastecimiento, agrícolas, ganaderos, industriales, forestales y recreativos), que deben ser al menos un tercio del total del Consejo, y de las organizaciones empresariales, sociales, medioambientales y universitarias, y por expertos de reconocido prestigio en materia de aguas. La regulación de sus funciones, composición y funcionamiento sigue pendiente al día de hoy, y resulta palmariamente significativo el vacío normativo absoluto que sobre este órgano guardan los Estatutos de la Agencia aprobados.

Los Estatutos centran su atención en la descripción organizativa y funcional de los órganos de gobierno de la Agencia, que ocupan la casi totalidad del capítulo II de la norma (arts. 6 a 16). Sin ánimo de exhaustividad, la estructura orgánica se concreta de este modo:

- a) Presidencia: corresponde al titular del órgano de gobierno responsable de la coordinación hidrológica, siendo sus funciones principales la representación legal de la Agencia, el desempeño de la superior función ejecutiva y directiva, y el control, la contratación y la administración patrimonial del ente (art. 7).

- b) El Consejo de Administración: se estructura en una presidencia (que coincide con el presidente de la Agencia), una vicepresidencia (que se reserva al titular de la Dirección Gerencia de la Agencia) y 11 vocales, que representan a las distintas áreas políticas con competencias que puedan afectar al gobierno y la gestión de las aguas (titulares de las direcciones generales de planificación territorial, urbanismo, desarrollo rural, evaluación ambiental, medio natural, explotaciones agrarias, industria y energía, política financiera y presupuestaria, y salud pública).

Como órgano superior de planificación y programación de la Agencia, sus funciones reflejan el peso decisivo del órgano dentro de la estructura organizativa y funcional, en detrimento de las que corresponden a la Presidencia, que, siguiendo la tendencia de destrucción de la denunciada hidrocefalia que ha caracterizado durante largo tiempo a las confederaciones hidrográficas, pasa a tener un valor simbólico y representativo más que funcional en la estructura de las administraciones estatal y autonómicas del agua, de forma que sus anteriores omnipotentes funciones se reparten entre el Consejo de Administración y la Gerencia. Como refleja el catálogo funcional del Consejo de Administración de nuestra agencia, sus cometidos son: la aprobación de los criterios generales de actuación y programación anuales y el seguimiento de su cumplimiento, la aprobación del anteproyecto de presupuestos, la actuación como correa de transmisión de los convenios formalizados con otras administraciones, la aprobación de los planes directores de abastecimiento de agua y depuración de aguas residuales, y la aprobación de las propuestas modificativas del organismo para su elevación al Consejo de Gobierno autonómico (art. 10). Como imperativo normativo en la regulación estatutaria de este órgano, los Estatutos detallan el estatuto del personal, el régimen de reuniones y la formalización de acuerdos (arts.11 y 12).

- c) La Dirección-Gerencia: es el órgano de gestión y administración ordinaria de la Agencia, cuyo titular, con rango orgánico de director general, es nombrado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Presidencia de la Agencia, de la que depende directamente. En sus funciones, siempre ejercidas bajo supervisión

directa del presidente, destacan: la dirección, la coordinación, la planificación y el control de las actividades de la Agencia, la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración, la propuesta y jefatura del personal, la gestión y ejecución del presupuesto, la política de subvenciones y la disposición presupuestaria. Siguiendo otros modelos autonómicos, la Dirección-Gerencia se estructura en tres unidades administrativas, cuyas dilatadas e importantes funciones se concretan en la norma (arts. 14 y 15). Esta organización funcional se concreta en: Unidad de Administración Hidráulica, Unidad de Planificación Hidrológica y Unidad de Vigilancia y Control. Además, la entidad de derecho público preexistente Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha encuentra su adscripción en la Agencia a través de la Dirección-Gerencia, manteniendo su personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, aunque resulta evidente que la parte más importante de sus funciones ha pasado a la estructura funcional de la Agencia autonómica.

3.2. Supresión del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, ¿una medida de racionalización del gasto público o el punto y final de una agonía anunciada?

Como ya dimos cuenta anteriormente, en el último año se ha acentuado la crisis crónica que venía padeciendo el Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, creado mediante Ley 11/2007, de 29 de marzo, y cuyos Estatutos se aprobaron por Decreto 16/2009, de 10 de marzo, cuya función más destacada era la gestión de las áreas protegidas, los recursos naturales y, en especial, los parques nacionales. Con una dirección interina después del cese de su anterior directora y falta de presupuesto efectivo para inversión (dedicado exclusivamente a saldar deudas anteriores), no ha podido renovar prácticamente ningún convenio con ayuntamientos ni otras organizaciones, y se ha visto obligado a retrasar la tramitación y aprobación de nuevas iniciativas ambientales ya comprometidas en la Comunidad Autónoma (como la ampliación de la Red de Espacios Protegidos), resultando llamativa su relegación en asuntos de indudable trascendencia ambiental en el ámbito autonómico.

Esta atropellada andadura culmina con la extinción del organismo mediante Decreto 97/2010, de 1 de junio (*DOCM* de 8 de junio de 2010). Aunque justificada en el proceso de racionalización de las estructuras administrativas y de contención del gasto público que comienza a visualizarse en la reestructuración de la Administración regional que llevó a cabo el Decreto 63/2010, de 24 de mayo (*DOCM* de 25 de mayo), lo cierto es que el organismo venía ya dando señas de esta agonía casi desde la aprobación de sus Estatutos. El Decreto de junio de este año trasmite las competencias del extinto organismo a la novel Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, cuyos bienes, patrimonio, derechos, obligaciones y personal quedan adscritos en las estructuras correspondientes de aquélla. En especial, todas las funciones ejecutivas y de carácter vinculante que la normativa de parques nacionales otorgaba a los parques de Cabañeros y Tablas de Daimiel pasan a asumirse por el titular de la correspondiente Dirección General de esta consejería.

3.3. La modificación de los Estatutos del Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana

Por último, queremos dar noticia de la modificación del Convenio de colaboración de 25 de febrero de 2008 entre la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades por el que se creó el Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana, lo que ha supuesto, además, la modificación de sus Estatutos mediante Resolución de 26 de agosto de 2010 (*DOCM* de 2 de septiembre de 2010). Como es conocido, este acuerdo concretaba el protocolo de colaboración entre ambas administraciones para el impulso, la coordinación, el seguimiento y el control de las medidas contenidas en las normas y los programas sectoriales del Plan Especial del Alto Guadiana y del Programa de Desarrollo Rural Sostenible del Alto Guadiana.

La reciente revisión afecta, por un lado, al detalle puntual de las normas organizativas de los órganos de presidencia y administración del Consorcio, y, por otro, adecua el ámbito funcional específico a las modificaciones que se han derivado de las nuevas normativas referidas a la evaluación ambiental de proyectos, planes y programas aprobados tras la firma del convenio. En tal sentido, ha sido necesario sustituir el mero carácter previo del informe sobre la coherencia de determinadas medidas con el Plan

Especial del Alto Guadiana por su exigencia preceptiva, que llega también al control de autorizaciones de sondeos hídricos de investigación o de cualquier otro tipo a desarrollar en el marco territorial del Plan. Desde el punto de vista organizativo se prevé novedosamente la posibilidad de prorrogar el mandato anual de la Presidencia, se amplía la cualidad de las personas que pueden ser elegidas para la Secretaría del Consorcio —que podrá ser un funcionario de los servicios jurídicos de las respectivas administraciones o, como novedad, un letrado de los propios servicios jurídicos del Consorcio— y, por último, se concreta la posibilidad de que entre el personal del Consorcio pueda contratarse personal eventual.

4. Actuaciones para el desarrollo sostenible del medio rural

A punto de concluir el período establecido por la Ley estatal 45/2007, de 14 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, para el establecimiento de los distintos programas, convenios y protocolos de actuación con las comunidades autónomas, se ha publicado la Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que contiene el Protocolo general con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo sostenible del medio rural (*BOE* de 2 de noviembre de 2010).

La norma estatal tiene por objeto establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural, tanto las condiciones básicas para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, como las bases para la ordenación general de la actividad económica en dicho medio. Su aplicación práctica ha sido objeto de planificación mediante el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, que fue aprobado por Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, que explicita las medidas de política rural, de competencia estatal y autonómica, así como los procedimientos y los medios para llevarlas a cabo, todas ellas relacionadas con los objetivos de la Ley, como son la mejora de la situación socioeconómica y la calidad de vida de las poblaciones de las zonas rurales en el marco del respeto ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. Este programa será de aplicación en los términos municipales del medio rural integrados en las zonas rurales delimitadas y calificadas por las comunidades

autónomas, según unos criterios de ruralidad comunes, elaborándose para cada una de ellas un plan de zona rural específico que concrete los criterios genéricos del Programa.

Pues bien, el primer paso para preparar el marco de concertación de las actuaciones entre ambas administraciones es definir las bases de colaboración y sus principales compromisos mediante un protocolo general que desemboque en la elaboración de los planes de zona sobre las zonas rurales de la Comunidad Autónoma incluidas en el Programa, de manera que posteriormente se pueda concertar la ejecución de sus actuaciones mediante el oportuno convenio de colaboración. Es este protocolo general, de naturaleza jurídico-administrativa, el que acaba de ser publicado en la Resolución que comentamos. En él se establecen un listado de actuaciones preparatorias, las zonas rurales sobre las que se elaborarán los planes de zona —con su ubicación provincial, calificación y nivel de prioridad—, las previsiones financieras globales de referencia de ambas administraciones, y los compromisos de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma para la debida ejecución de las actuaciones. Finalmente, se crea una comisión de seguimiento de las actuaciones derivadas del Protocolo para facilitar la cooperación y coordinación entre las partes, con la siguiente composición:

- Presidente: el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, o persona que designe al efecto.
- Por parte de la Administración General del Estado, dos representantes designados por la DGDSMR y un representante de la Delegación del Gobierno.
- Por parte de la Comunidad Autónoma, la directora general de Desarrollo Rural, que actuará de vicepresidenta, y dos representantes designados por ella.

Las zonas rurales en las que se implementarán las actuaciones, ya descritas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y para las que se van a elaborar los planes de zona son las siguientes: Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, Sierra del Segura, La Manchuela, Mancha Júcar-Centro, Monte Ibérico, Corredor de Almansa, Campos de Hellín, Valle de Alcudía, Montes Sur y Norte de Ciudad Real, Campo de Montiel, Campo de Calatrava, Cabañeros, Mancha norte, Alto Guadiana Mancha, Serranía de Cuenca, Alcarria conquense, Sierra y Mancha conquense, Záncara, Manchuela conquense, Molina de Aragón-Alto Tajo, Tajo-Tajuña, Alcarria y Campiña de

Guadalajara, Campana de Oropesa de Toledo, Tajo medio, Montes de Toledo, Sierra de San Vicente y La Jara, Mesa de Ocaña y Mancha toledana.

A los exclusivos efectos de definir una envolvente financiera tentativa que sirva como referencia para enmarcar la elaboración de los presupuestos de los planes de zona de la Comunidad, ambas partes han establecido unos montantes financieros orientativos globales para el conjunto de planes, unos 22,62 millones de euros anuales por cada administración. Hay que tener en cuenta que no comprometen directamente los presupuestos hasta que no sean elaborados los proyectos específicos de planes de zona de la Comunidad Autónoma, debiendo entonces materializarse el acuerdo para su ejecución concertada y cofinanciada mediante convenio de colaboración.

Para la debida ejecución de las actuaciones a que se refiere este protocolo, la Comunidad Autónoma se compromete a:

- a) Organizar la coordinación institucional de las consejerías/departamentos de la Comunidad Autónoma competentes para la elaboración y posterior ejecución de los planes de zona, mediante el Consejo Regional para el Desarrollo Rural, órgano creado a tal efecto por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla La Mancha.
- b) Designar a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente como órgano encargado de la coordinación operativa por parte de la Comunidad Autónoma, y para la elaboración de los proyectos de planes de zona, en la que se entiende incluida la elaboración y ejecución del programa de participación pública.
- c) Elaborar y poner a disposición del público, dentro del mes siguiente a la suscripción del Protocolo, el programa de actividades de participación pública a seguir en el proceso de elaboración de cada plan de zona, y documentar posteriormente su realización y sus resultados.
- d) Crear formalmente, en el plazo de un mes desde la firma del Protocolo, un órgano de participación para cada zona rural objeto de planificación, con el fin de facilitar una participación pública real y efectiva, tanto en la elaboración del

plan de zona como en su posterior seguimiento y evaluación. En dicho órgano estarán al menos representados las corporaciones locales de la zona y los agentes económicos, sociales y ambientales que tengan actuación en el territorio. Podrá asistir a las reuniones de dicho órgano, en calidad de observador, una representación de la Administración General del Estado, por lo que se notificarán electrónicamente todas las convocatorias tanto a la Delegación del Gobierno como a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en los mismos plazos que al resto de sus miembros.

e) Disponer de los proyectos de planes de zona en el plazo máximo de cuatro meses desde la suscripción del Protocolo, con las características especificadas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, tras acreditar que se ha realizado del programa de participación pública previsto, y haber concluido su evaluación ambiental con la oportuna memoria ambiental conjunta, en caso de que fuera preceptiva.

f) Aprobar los planes de zona tras haber concertado con la Administración General del Estado sus términos de la forma que determina el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. En caso de que los procesos de concertación sobre las tres categorías de acciones autonómicas cofinanciadas, acciones de los departamentos ministeriales y obras públicas de interés general, no puedan resolverse simultáneamente, la aprobación del plan de zona podrá ser parcial y afectar exclusivamente a las actuaciones sobre las que sí se haya materializado el acuerdo.

g) Incluir en los proyectos de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2011 y siguientes las previsiones y dotaciones presupuestarias necesarias para posibilitar la ejecución de los planes de zona.

5. Medidas de fomento en materia de conservación de espacios naturales

Mediante Orden de 5 de octubre de 2010 ha sido modificada significativamente la Orden de 26 de septiembre de 2009, que establecía las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de actuaciones de apoyo a la conservación de las áreas

y los recursos naturales protegidos y para contribuir al desarrollo socioeconómico de los municipios en los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha (*DOCM* de 11 de octubre de 2010). Esta revisión obedece a un triple fin que la gestión de la medida desde su aprobación parece imponer:

- En primer lugar, se ha puesto de manifiesto la necesidad de incluir entre las actuaciones subvencionadas en concepto de “apoyo a la conservación” aquellas desarrolladas en las áreas críticas de especies con plan de conservación aprobado y que deben contar con idéntico mecanismo de apoyo y cofinanciación, de modo que entre estas medidas subvencionables, en tanto contribuyan a la mejora del medio natural, se encontrarán: la red de áreas protegidas (con exclusión de los parques nacionales), las zonas periféricas de protección de espacios naturales protegidos, las zonas sensibles de protección concertada, las zonas de dispersión del águila imperial ibérica y las áreas críticas de especies con plan de conservación.
- En segundo lugar, se ha incluido entre los posibles beneficiarios de la línea subvencional de desarrollo socioeconómico a las entidades locales que cuenten con un plan de ordenación de los recursos naturales aprobado en la fecha de la convocatoria, en la idea de que este tipo de planificación conlleva determinadas limitaciones que es preciso compensar mediante apoyo y cofinanciación públicos.
- En tercer lugar, se ha corregido el momento en que deben considerarse “iniciadas” las inversiones, para incluir, junto al momento de iniciación de los trabajos de construcción, el momento en que comienza la prestación de los servicios, ya que, a los efectos de la concesión de subvención, ambos tiempos revisten la misma importancia.

Sumari: 1. Panoràmica i valoració general: insistint en les polèmiques sobre les obres d'abocaments, les actuacions de revaloració de la sostenibilitat del medi rural i el nou horitzó obert a Castella-la Manxa en matèria de política hidràulica; fal·làcia, ficció o realitat? 2. Planificació de l'ordenació de recursos naturals i la iniciació de procediments per declarar nous parcs naturals i monuments naturals 3. Novetats organitzatives en l'Administració hidràulica autonòmica i en l'Administració ambiental. 3.1. L'aprovació de l'Estatut de l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa. A. Funcions de defensa i foment de l'ús sostenible dels recursos hídrics autonòmics. B. Estructura orgànica de l'Agència de l'Aigua: la reiteració del model clàssic. 3.2. Supressió de l'organisme autònom Espais Naturals de Castella-la Manxa: una mesura de racionalització de la despesa pública o el punt i final d'una agonia anunciada? 3.3. La modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió del Pla Especial de l'Alt Guadiana; 4. Actuacions per al desenvolupament sostenible del medi rural. 5. Mesures de foment en matèria de conservació d'espais naturals.

1. Panoràmica i valoració general: insistint en les polèmiques sobre les obres d'abocaments, les actuacions de revaloració de la sostenibilitat del medi rural i el nou horitzó obert a Castella-la Manxa en matèria de política hidràulica; fal·làcia, ficció o realitat?

Durant el període analitzat les novetats normatives no han estat gaires, però sí que n'hi ha alguna de singular, com l'aprovació dels estatuts de l'organisme autònom Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa o la declaració de monuments naturals i l'aprovació dels plans d'ordenació de recursos naturals del Valle de Alcudia, Sierra Madrona i Sierra Norte de Guadalajara, amb la consegüent iniciació del procediment per declarar els parcs naturals afectats.

Des del punt de vista organitzatiu, i com ja anunciàvem en la crònica anterior, els mals auguris sobre l'organisme autònom Espais Naturals de Castella-la Manxa s'han complert perquè s'ha extingit al juny d'aquest any, per la qual cosa els seus fins i objectius els ha assumit la nova Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. Així mateix, s'ha modificat —fonamentalment en els aspectes estructurals— el Conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i la Junta de Comunitats de 15 de febrer de 2008, pel qual es va crear el Consorci per a la Gestió del Pla Especial de l'Alt Guadiana i se'n van aprovar els estatuts.

Entre les actuacions de foment, durant aquest espai temporal, també s'han publicat convocatòries de subvencions importants destinades al foment, la conservació o l'aprofitament d'actuacions de suport a la conservació d'àrees naturals.

Com no podia ser menys, algunes iniciatives polítiques de gran repercussió ambiental s'han vist envoltades d'una controvertida discussió mediàtica i de l'anunci d'accions

judicials per part de col·lectius ecologistes regionals, per la qual cosa cal destacar: la declaració d'impacte ambiental del projecte d'autovia Toledo-Ciudad Real, la cimentera de la Parrilla a Conca, o la paralització de les obres de l'abocador de Toledo.

En fi, la conselleria continua avançant en l'esborrany de l'Estratègia Regional de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic 2010-2012, amb l'horitzó 2020, pendent que el Consell Regional del Clima el ratifiqui. Al principi de novembre, s'ha incorporat al Pacte contra el canvi climàtic de Castella-la Manxa, signat a l'octubre de 2009, l'Associació de Centres de Desenvolupament Rural de Castella-la Manxa (CEDERCAM), i a través d'aquesta associació, els grups de desenvolupament rural de la nostra regió. Amb aquesta incorporació, les entitats adherides al Pacte ja són 27, entre les quals es troben 18 institucions o organitzacions, 3 ajuntaments i 5 entitats empresarials. Atesos els ambiciosos objectius del Pla Regional —dels quals vam donar compte en la crònica anterior— l'adhesió d'aquest nou col·lectiu resulta essencial, atesa l'enorme repercussió en el medi rural de les mesures estratègiques enfront del canvi climàtic, la qual cosa, a més a més, i a judici del Govern regional reverteix indubtablement en beneficis per millorar la qualitat de vida dels municipis. No és sobrer recordar que de les 300 mesures de l'Estratègia, més de la meitat derivaran positivament en l'economia rural de Castella-la Manxa, perquè 50 mesures són específiques per a l'agricultura; 41, per a la ramaderia; 31 estan relacionades amb el sector forestal, cinegètic, amb els espais protegits i la biodiversitat; 50 es relacionen amb la gestió de residus; 26, amb habitatge i urbanisme; 11 amb el turisme, i 12 afecten la salut ambiental.

En relació directa amb aquesta qüestió, segons informa el Govern regional al web, s'estan ultimant els convenis per aplicar la llei estatal de desenvolupament rural sostenible a les zones rurals que s'han de revitalitzar, i el termini fixat pel Ministeri de Medi Ambient per dur a terme aquestes actuacions finalitzarà a l'octubre. Segons les fonts oficials, el Govern de Castella-la Manxa donarà prioritat a zones com el Parque Natural del Alto Tajo o la Serranía de Cuenca, d'acord amb el Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural de Castella-la Manxa, que, aprovat paral·lelament a la llei estatal, va dividir les àrees d'actuació imposades per la norma bàsica en 29 comarques. Amb tota una sèrie de “programas horizontales” per a la

pràctica totalitat de les comarques, destaquen els de suport al transport públic, de foment de projectes generadors d'activitat econòmica pel que fa a l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i del turisme vinculat al patrimoni natural. Amb això, l'actuació autonòmica pretén acostar-se al fi nuclear d'una llei que pretén conciliar economia, desenvolupament i sostenibilitat en l'àmbit rural. En aquest sentit, destaca l'aprovació i la publicació de la Resolució de 14 d'octubre de 2010, de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, de "Protocolo general con la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha, para el desarrollo sostenible del medio rural", que constitueix el marc general d'actuació i concreció de les polítiques autonòmiques que resulten de la llei bàsica estatal.

Per acabar, hem de destacar el paper que ha de representar la comunitat autònoma en l'actual procés d'elaboració dels plans de conca dels rius que transcorren pel nostre territori. Tot i que les notícies encara no són gaires i caldrà un estudi més detingut quan culmini el procés, l'actual esborrany del Pla de Conca del Tajo sembla un bon document de partida, ja que recull alguns dels plantejaments de la política hídrica defensada pel Govern regional, entre els quals podem destacar: l'increment del cabal ecològic del riu Tajo o el manteniment de làmines permanents d'aigua als embassaments d'Entrepeñas i Buendía, que al seu dia tant van afectar el desenvolupament econòmic de les zones limítrofes. El document ha estat objecte de crítiques severes per part del Sindicat Central de Regants de l'Aqüeducte Tajo-Segura que, fent visibles les veus dels regants del Llevant espanyol, manifesta el seu interès a conservar la inèrcia de l'ús tradicional dels rius sense cercar alternatives que garanteixin altres sistemes de subministrament, amb la qual cosa impedeixen a altres comunitats autònomes, especialment la nostra, utilitzar aigua per al desenvolupament econòmic i social, vedat durant tants anys.

Potser pot resultar significatiu que alguna cosa en matèria d'aigües es mou a favor de la nostra autonomia, l'anunci públic de la futura fusió de les societats públiques d'aigües Hidroguadiana, Aguas del Tajo i Aguas de la Cuenca del Guadalquivir en una nova societat que es constituirà abans de finals de desembre de 2010 amb el nom d'Aguas de la Cuenca del Sur, la seu de la qual es constituirà a Toledo, segons l'acord a què es va arribar.

2. Planificació de l'ordenació de recursos naturals i la iniciació de procediments per declarar nous parcs naturals i monuments naturals

Durant aquest període s'han aprovat dos plans d'ordenació de recursos naturals i s'ha iniciat el procediment per declarar els parcs naturals que inclouen. Això s'ha produït mitjançant el Decret 214/2010 i el Decret 215/2010, de 28 de setembre (DOCM de 5 d'octubre de 2010), pels quals s'aprova, respectivament, el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Valle de Alcudia i Sierra Madrona, i de la Sierra Norte de Guadalajara, i s'inicia el procediment per declarar ambdós espais com a parcs naturals. Tot això d'acord amb la Llei 9/1999, de 26 de maig, de conservació de la natura, la qual cosa comporta aplicar el règim de protecció preventiva previst en aquesta norma a totes les activitats reflectides en el Pla que no s'hagin qualificat expressament com a "compatibles" i aplicar el règim sancionador previst específicament. Així mateix, el Decret 214/2010 atorga la declaració d'espai protegit al Monumento Natural del Volcán de Alhorín i a la Reserva Fluvial del Río Guadalmez, amb la qual cosa, d'aquesta manera, es completa la pràctica totalitat dels espais protegits del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Valle de Alcudia i Sierra Madrona.

D'altra banda, el Decret 224/2010, de 26 d'octubre (DOCM de 29 octubre de 2010), declara monument natural l'espai natural ubicat a la província de Toledo (termes municipals d'Albarreal de Tajo, Burujón i La Puebla de Montalván) denominat "Barrancas de Castrejón y Calaña", perquè reuneix les característiques que preveu l'article 45 de la Llei autonòmica 9/1999, de 26 de maig, de conservació de la natura. El Decret justifica aquesta declaració amb l'indubtable valor paisatgístic (exemple singular del paisatge d'incisió del riu Tajo) i amb la importància zoològica, de manera que la importància dels hàbitats i de les espècies de la zona ha motivat incloure la major part del conjunt en el territori regional de la Xarxa Natura 2000, amb la qual cosa forma part de la ZEPA i el LIC "Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután." La norma, d'acord amb l'exigències de la Llei 9/1999, estableix el marc normatiu precís per atorgar atenció preferent a la conservació dels valors ecològics, geològics i científics de la zona, la qual cosa suposa fonamentalment establir el règim d'usos, d'aprofitaments i d'activitats (art. 3), determinar el règim d'administració i de gestió, que correspon a la Direcció General d'Àrees Protegides i Biodiversidad, (art. 5) i

classificar els instruments de planificació urbanística de la superfície afectada pel monument natural com a “suelo rústico de protección natural” (art. 4). Les disposicions addicionals primera i segona estableixen expressament com a activitat prioritària en la gestió de l'espai protegit la substitució dels pals de la línia elèctrica per d'altres de disseny innovador que evitin el perill d'electrocució de l'avifauna, i obliguen, a més a més, a minimitzar l'afecció paisatgística de l'entorn en els diferents tràmits d'informe o avaluació ambiental de plans i projectes, la qual cosa suposa una novetat destacable en aquesta mena de normes de protecció ambiental d'espais protegits.

Encara que no es tracti expressament d'un espai natural protegit, però atès l'indubtable valor ambiental que presenta, ens ha semblat oportú anunciar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de 15 de setembre de 2010, per executar el projecte de classificació, delimitació, amononament i senyalització de l'anomenada “Cañada Real La Plata”, al seu trajecte per la província de Ciudad Real, i de la “Cañada Real de Zaragoza a Andalucía”, al seu pas per la província de Guadalajara, publicat mitjançant la Resolució de 19 d'octubre de 2010 (*DOCM* de 2 de novembre de 2010). Aquest conveni, del qual la clàusula setena en predica expressament la natura administrativa, troba fonament normatiu en la Llei bàsica 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries i el desplegament autonòmic mitjançant la Llei 9/2003, de 20 de març, de vies pecuàries de Castella-la Manxa. Així, en l'àmbit de col·laboració i unint esforços, aquest conveni i les actuacions que comporta suposen ampliar l'àmbit de vies pecuàries confrontants (Cañada Real Soriana Oriental y Real Conquense), i implementa els programes de determinació física de les vies pecuàries que formen part de la xarxa nacional i la revaloració dels itineraris ramaders tradicionals des de la perspectiva natural, cultural i recreativa, potenciant les noves possibilitats que ha anat autoritzant la normativa vigent. Aquest conveni fixa taxativament els respectius compromisos de les parts (clàusula segona), les obligacions econòmiques (tercera), la durada (fins al 31 de desembre de 2014) i constitueix la Comissió Mixta de Seguiment, integrada per cinc membres, dos en representació de la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal, dos en representació de la Direcció General de Política Forestal i un en representació de la Delegació del Govern a Castella-la Manxa.

3. Novetats organitzatives en l'Administració hidràulica autonòmica i en l'Administració ambiental

3.1. L'aprovació de l'Estatut de l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa

Tal com es va informar en la crònica precedent, la Llei 6/2009, de 17 de desembre, va crear l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa com a organisme autònom adscrit a l'òrgan de govern responsable de la coordinació hidrològica, i l'Administració Hidràulica autonòmica es va constituir per exercir competències actuals i futures en matèria d'aigües en l'àmbit de la comunitat. Amb aquesta mesura organitzativa se segueix el camí que han iniciat altres autonomies a l'hora de constituir les pròpies administracions de l'Aigua, que conviuen per gestionar els interessos propis amb l'Administració Hidràulica estatal, l'exponent primer de la qual són les confederacions hidrogràfiques.

Tal com imposava la llei, s'ha procedit al desplegament normatiu de l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa mitjançant el Decret 179/2010, d'1 de juliol (*DOCM* de 6 de juliol de 2010). En la norma, similar quant a definició, estructura, continguts i fins a la resta d'organismes autònoms que l'han precedit —per més que existeixin notables diferències entre si—, recull com a capítols essencials: les funcions i potestats (capítol I), l'organització (capítol II, que constitueix el gruix del decret) i el règim jurídic, economicofinancer, patrimonial i de personal (capítol III), de natura juridicoadministrativa i d'acord amb la modalitat jurídica de què s'ha decidit dotar la nostra Administració hidràulica com a organisme autònom, una de les principals notes diferenciadores respecte a altres administracions autonòmiques de l'Aigua.

A. Funcions de defensa i foment de l'ús sostenible dels recursos hídrics autonòmics

Recordem que l'aposta decisiva per crear aquest organisme es justificava en el compliment dels objectius de la directiva marc de l'aigua, tant pel que fa a la integració de la política hidràulica en la resta de polítiques sectorials, com pel que fa a l'exigència de l'ús sostenible, responsable i eficient del recurs. Amb relació al nou ens autònom, es van concretar en les mesures següents: 1) aconseguir una política activa d'ús sostenible

de l'aigua, mitjançant la programació, l'aprovació, l'execució i l'explotació d'infraestructures hidràuliques; 2) defensar i protegir els recursos hídrics en coordinació amb la resta d'organismes i administracions públiques, i 3) contribuir a l'ordenació del territori, partint de la consideració de l'aigua com a element dinamitzador del progrés i el desenvolupament econòmic i social, compatibilitzant-ho amb la protecció del medi ambient.

Atesa la consideració de l'aigua com a recurs fonamentalment caracteritzat pel seu valor ecològic i ambiental, les funcions de l'Agència reflecteixen l'empremta d'aquest recurs natural en el prolix article 4 del decret que, sintèticament, es refereixen a: l'exercici de competències en matèria d'obres hidràuliques, ordenació i protecció dels recursos hídrics autonòmics, participació en la planificació, coordinació amb la resta d'òrgans competents en matèria d'aigües (autonòmics o estatals), règim demanial, inspecció i control, participació orgànica i funcional en l'Administració hidràulica estatal. Explícitament, les competències relacionades amb el caràcter i l'ús sostenible de l'aigua són les següents:

- a) Programació, promoció, aprovació, execució i explotació d'obres hidràuliques declarades d'interès regional, incloent en tot cas les relatives a abastament, sanejament, depuració, canalització i defensa de marges dels rius i aprofitaments hidràulics en general.
- b) Programació, promoció i aprovació de regadius i de les obres hidràuliques necessàries.
- c) Proposta i aprovació inicial del Pla Director d'Abastament d'Aigua i del Pla de Depuració d'Aigües Residuals Urbanes.
- d) Desplegament de programes, ordenació i protecció dels recursos hídrics de competència autonòmica.
- e) Participació en la planificació, en l'ordenació i en la protecció dels recursos hídrics que afectin la comunitat autònoma, inclosa la reutilització d'aigües residuals depurades per a qualsevol ús, en coordinació amb la planificació hidrològica de l'Estat, en el marc de la legislació d'aigües vigent.

- f) Confecció d'una base de dades d'aprofitaments de les aigües subterrànies i superficials que afectin la comunitat autònoma.
- g) Exercici de funcions d'inspecció i de control d'abastament, de sanejament i de depuració, en particular relatives a cabals circulants, vigilància i control de la qualitat de les aigües, dels abocaments i de la contaminació.
- h) Foment de les activitats públiques i privades destinades a un ús més racional dels recursos hidràulics de la regió, inclosa la gestió d'ajudes i de subvencions en la matèria.

B. Estructura orgànica de l'Agència de l'Aigua: la reiteració del model clàssic

Quant a l'estructura orgànica, no trobem novetats rellevants que la singularitzin respecte a altres agències autonòmiques creades amb anterioritat. En l'organització interna es conciten els diferents interessos implicats, exigència imposada, d'altra banda, en la legislació estatal d'aigües: administració regional, provincial i, de manera essencial, interessats i usuaris. Els nivells generals d'organització de l'agència són tres:

- a) Òrgans de govern, que concreten l'estructura regional amb tres òrgans: Presidència, Consell d'Administració (com a òrgan superior de planificació i programació) i Direcció-Gerència.
- b) Descentralització local: serveis provincials per exercir les funcions en aquest àmbit territorial, que segons els estatuts han de representar l'Agència en l'àmbit territorial corresponent mitjançant les persones titulars de les delegacions provincials de l'òrgan del Consell de Govern responsable de la coordinació hidrològica (art. 6.2).
- c) Un òrgan consultiu i de participació en matèria d'aigua que, sota la denominació de "*Consejo Consultivo del Agua de Castilla-La Mancha*", s'integra per: representants de l'Administració regional i local, dels usuaris de totes les demarcacions hidrogràfiques que afecten Castella-la Manxa (abastament, agrícoles, ramaders, industrials, forestals i recreatius) que han de ser almenys un

terç del total del Consell, al costat dels representants de les organitzacions empresarials, socials, mediambientals, universitats i experts de reconegut prestigi en matèria d'aigües. La regulació de les seves funcions, la composició i el funcionament continua pendent al dia d'avui, i el buit normatiu absolut que els estatuts aprovats de l'Agència guarden sobre aquest òrgan resulta palmàriament significatiu.

Els estatuts centren l'atenció en la descripció organitzativa i funcional dels òrgans de govern de l'Agència, que ocupen gairebé tot el capítol II de la norma (art. del 6 al 16). Sense ànim d'exhaustivitat, l'estructura orgànica es concreta d'aquesta manera:

a) Presidència: correspon al titular de l'òrgan de govern responsable de la coordinació hidrològica, i les funcions principals són: representar legalment l'Agència, exercir la funció superior executiva i directiva; controlar, contractar i administrar el patrimoni de l'ens (art. 7).

b) El Consell d'Administració: s'estructura en la Presidència (que coincideix amb el president de l'Agència), la Vicepresidència (que es reserva al titular de la Direcció Gerència de l'Agència) i onze vocals, que representen les diferents àrees polítiques amb competències que poden afectar el govern i la gestió de les aigües (titulars de les direccions generals de planificació territorial, urbanisme, desenvolupament rural, avaluació ambiental, medi natural, explotacions agràries, indústria i energia, política financera i pressupostària, i salut pública).

Com a òrgan superior de planificació i programació de l'Agència, les seves funcions reflecteixen el pes decisiu de l'òrgan en l'estructura organitzativa i funcional, en detriment de les que corresponen a la Presidència, que, seguint la tendència de destruir la hidrocefàlia denunciada que ha caracteritzat durant molt temps les confederacions hidrogràfiques, passa a tenir un valor simbòlic i representatiu més que funcional en l'estructura de les administracions estatal i autonòmiques de l'Aigua, amb la qual cosa, les anteriors funcions omnipotents es reparteixen entre el Consell d'Administració i Gerència. Com reflecteix el catàleg funcional del Consell d'Administració de la nostra Agència: aprovació dels criteris generals d'actuació i programació anual, seguiment del seu compliment, aprovació de l'avantprojecte de pressupostos, corretja de transmissió dels convenis formalitzats amb altres administracions, aprovació dels plans directors

d'abastament d'aigua i depuració d'aigües residuals, i aprovació de les propostes modificatives de l'organisme per elevar-les al Consell de Govern autonòmic (art. 10). Com a imperatiu normatiu en la regulació estatutària d'aquest òrgan, els estatuts conciten al detall l'estatut personal, règim de reunions i formalització d'acords (art. 11 i 12)

c) La Direcció-Gerència: és l'òrgan de gestió i d'administració ordinària de l'Agència, el titular de la qual, amb rang orgànic de director general, és nomenat pel Consell de Govern d'acord amb la proposta de la Presidència de l'Agència, de qui depèn directament. Entre les seves funcions, que sempre ha d'exercir sota la supervisió directa del president, destaquen: dirigir, coordinar, planificar i controlar les activitats de l'Agència, executar els acords del Consell d'Administració, proposar i dirigir el personal, gestionar i executar el pressupost, ocupar-se de la política subvencional i de la disposició pressupostària. Seguint altres models autonòmics, la Direcció-Gerència s'estructura en tres unitats administratives, les funcions dilatades i importants de les quals es concreten en la norma (art. 14 i 15). Aquesta organització funcional es concreta en: la Unitat d'Administració Hidràulica; la Unitat de Planificació Hidrològica i la Unitat de Vigilància i Control. A més a més, l'entitat de dret públic preexistent Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha s'adscriu a l'Agència a través de Direcció-Gerència, i manté la personalitat jurídica i la plena capacitat d'obrar, tot i que resulta evident que la part més important de les seves funcions ha passat a l'estructura funcional de l'Agència autonòmica.

3.2. Supressió de l'organisme autònom Espais Naturals de Castella-la Manxa: una mesura de racionalització de la despesa pública o el punt i final d'una agonia anunciada?

Com ja vam anunciar anteriorment, en l'últim any s'ha accentuat la crisi crònica que patia l'organisme autònom Espais Naturals de Castella-la Manxa, creat mitjançant la Llei 11/2007, de 29 de març, i els estatuts de la qual es van aprovar mitjançant el Decret 16/2009, de 10 de març, el qual tenia com a funció destacada gestionar les àrees protegides, els recursos naturals i especialment els parcs nacionals. Amb direcció interina després del cessament de l'anterior directora i la falta de pressupost efectiu per

invertir (dedicat exclusivament a saldar deutes anteriors), no ha pogut renovar pràcticament cap conveni ni amb ajuntaments ni amb altres organitzacions, i s'ha vist obligat a retardar la tramitació i l'aprovació de noves iniciatives ambientals que ja s'havien compromès a la comunitat autònoma (com l'ampliació de la Xarxa d'Espais Protegits), per la qual cosa crida l'atenció el fet que s'ha relegat en afers d'indubtable transcendència ambiental en l'àmbit autonòmic.

Aquest camí precipitat culmina amb l'extinció de l'organisme mitjançant el Decret 97/2010, d'1 de juny (*DOCM* de 8 de juny de 2010). Encara que justificada en el procés de racionalització de les estructures administratives i contenció de la despesa pública que comença a visualitzar-se en la reestructuració de l'Administració regional que va dur a terme el Decret 63/2010, de 24 de maig (*DOCM* de 25 de maig), el cert és que l'organisme ja donava senyals d'aquesta agonia gairebé des que es van aprovar els estatuts. El decret de juny d'aquest any transmet i subroga en les competències de l'extint organisme a la novella Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, amb la qual cosa els béns, el patrimoni, els drets, les obligacions i el personal adscrit passen a les estructures corresponents de la conselleria. En especial, totes les funcions executives i de caràcter vinculant que la normativa de parcs nacionals atorgava al Parque de Cabañeros i al Parque de las Tablas de Daimiel les assumeix el titular de la Direcció General corresponent d'aquesta conselleria.

3.3. La modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió del Pla Especial de l'Alt Guadiana

A l'últim, volem donar notícia de la modificació del Conveni de col·laboració de 25 de febrer de 2008 entre l'Administració General de l'Estat i la Junta de Comunitats pel qual es va crear el Consorci per a la Gestió del Pla Especial de l'Alt Guadiana, la qual cosa ha suposat, a més a més, modificar-ne els estatuts, mitjançant la Resolució de 26 d'agost de 2010 (*DOCM* de 2 de setembre de 2010). Com és conegut, aquest acord concretava el protocol de col·laboració entre ambdues administracions per impulsar, coordinar, seguir i controlar les mesures que contenen les normes i programes sectorials del Pla Especial de l'Alt Guadiana i del Programa de Desenvolupament Rural Sostenible de l'Alt Guadiana.

La revisió recent afecta, d'una banda, el detall puntual de les normes organitzatives dels òrgans de presidència i d'administració del Consorci i, de l'altra, adequa l'àmbit funcional específic a les modificacions que han derivat de les noves normatives referides a l'avaluació ambiental de projectes, plans i programes aprovades després de la signatura del conveni. En aquest sentit, ha calgut substituir el mer caràcter previ de l'informe sobre la coherència de determinades mesures amb el Pla Especial de l'Alt Gadiana per la seva exigència preceptiva, que arriba també al control d'autoritzacions de sondejós hídrics d'investigació o de qualsevol altra mena que cal dur a terme en el marc territorial del Pla. Des del punt de vista organitzatiu, novament es preveu la possibilitat de prorrogar el mandat anual de la Presidència, s'amplia la qualitat dels possibles electes a la Secretaria del Consorci, que bé podrà ocupar un funcionari dels serveis jurídics de les respectives administracions o, com a novetat, un lletrat dels mateixos serveis jurídics del Consorci i, a l'últim, es concreta la possibilitat que entre el personal del Consorci es pugui contractar personal eventual.

4. Actuacions per al desenvolupament sostenible del medi rural

Aviat conclourà el període que estableix la Llei estatal 45/2007, de 14 de desembre, de desenvolupament sostenible del medi rural per a l'establiment dels diferents programes, conveni i protocols d'actuació amb les comunitats autònomes, s'ha publicat la Resolució de 14 d'octubre de 2010, de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, que conté el protocol general amb la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, per al desenvolupament sostenible del medi rural (*BOE* de 2 de novembre de 2010).

La norma estatal té com a objecte establir mesures per afavorir el desenvolupament sostenible del medi rural, tant condicions bàsiques per garantir la igualtat de tots els ciutadans, com bases per a l'ordenació general de l'activitat econòmica en aquest medi. La seva aplicació pràctica ha estat objecte de planificació mitjançant el primer Programa de Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014, que va ser aprovat pel Reial decret 752/2010, de 4 de juny, que explicitava mesures de política rural, de competència estatal i autonòmica, així com procediments i mitjans per dur-les a terme, totes relacionades amb els objectius de la llei, com són la millora de la situació

socioeconòmica i la qualitat de vida de les poblacions de les zones rurals en el marc del respecte ambiental i l'ús sostenible dels recursos naturals. Aquest programa s'ha d'aplicar en els termes municipals del medi rural integrats a les zones rurals delimitades i qualificades per les comunitats autònomes, segons criteris de ruralitat comuns, per això, per a cadascuna, s'ha d'elaborar un pla de zona rural específic que concreti els criteris genèrics del programa.

Per tant, el primer pas per preparar el marc de concertació de les actuacions entre ambdues administracions és definir les bases de col·laboració i els principals compromisos mitjançant un protocol general que conclouï amb l'elaboració dels plans de zona sobre les zones rurals de la comunitat autònoma incloses en el programa, de manera que posteriorment se'n pugui concertar l'execució de les actuacions mitjançant el conveni de col·laboració oportú. És aquest protocol general, la natura del qual és juridicoadministrativa, el que acaba de publicar la resolució que comentem. En el protocol s'hi estableixen: el llistat d'actuacions preparatòries, les zones rurals sobre les quals s'han d'elaborar els plans de zona —amb la ubicació provincial, la qualificació i el nivell de prioritat—, previsions financeres globals de referència d'ambdues administracions, els compromisos de l'Administració general de l'Estat i de la comunitat autònoma per a la deguda execució de les actuacions. En fi, es crea la Comissió de Seguiment de les actuacions derivades del protocol per facilitar la cooperació i la coordinació entre les parts, amb la composició següent:

- President: el director general de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, o la persona que designi a l'efecte.
- Per part de l'Administració general de l'Estat: dos representants designats pel DGDSMR i un representant de la Delegació del Govern.
- Per part de la comunitat autònoma: la directora general de Desenvolupament Rural, que actua de vicepresidenta i dos representants designats per ella mateixa.

Les zones rurals sobre les quals s'han de realitzar les actuacions, descrites en el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible i per a les quals s'elaboraran els plans de zona, són les següents: Sierra de Alcaraz i Campo de Montiel, Sierra del Segura, La Manchuela, Mancha Júcar-Centro, Monte Ibérico, Corredor de Almansa, Campos de

Hellín, Valle de Alcudia, Montes Sur y Norte de Ciudad Real, Campo de Montiel, Campo de Calatrava, Cabañeros, Mancha Norte, Alto-Guadiana-Mancha, Serranía de Cuenca, Alcarria Conquense, Sierra y Mancha Conquense, Záncara, Manchuela Conquense, Molina de Aragón-Alto Tajo, Tajo-Tajuña, Alcarria i Campiña de Guadalajara, Campana de Orpesa de Toledo, Tajo medio, Montes Toledanos, Sierra de San Vicente y de la Jara, Mesa de Ocaña i Mancha Toledana.

Només als efectes de definir una envoltant financera temptativa que serveixi com a referència per emmarcar l'elaboració dels pressupostos dels plans de zona de la comunitat, ambdues parts han establert muntants financers orientatius globals per al conjunt de plans, uns 22,62 milions d'euros anuals, per cada Administració. Tenint en compte que no comprometen directament els pressupostos fins que no s'elaborin els projectes específics de plans de zona de la comunitat autònoma, llavors ha de materialitzar-se l'acord per a la seva execució concertada i cofinançada mitjançant el conveni de col·laboració.

Per a l'execució corresponent de les actuacions a què es refereix aquest protocol, la comunitat autònoma es compromet a:

- a) Organitzar la coordinació institucional de les conselleries/departaments de la comunitat autònoma competents per elaborar i executar posteriorment els plans de zona, mitjançant el Consell Regional per al Desplegament Rural, òrgan creat a l'efecte per l'Acord de Consell de Govern de 12 de febrer de 2008 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural de Castella-la Manxa.
- b) Designar la Direcció General de Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient com a òrgan encarregat de la coordinació operativa per part de la comunitat autònoma, i per elaborar els projectes de plans de zona, en la qual es considera inclosa l'elaboració i l'execució del programa de participació pública.
- c) Elaborar i posar a disposició del públic, durant el mes següent a la subscripció del protocol, el programa d'activitats de participació pública que cal seguir en el procés d'elaboració de cada pla de zona, i documentar-ne posteriorment la realització i els resultats.

d) Crear formalment, en el termini d'un mes des de la signatura del protocol, un òrgan de participació per a cada zona rural objecte de planificació, a fi de facilitar la participació pública real i efectiva, tant en l'elaboració del pla de zona com en els posteriors seguiment i avaluació. En aquest òrgan almenys han d'estar representades les corporacions locals de la zona i els agents econòmics, socials i ambientals que tinguin actuació al territori. Pot assistir a les reunions de l'òrgan esmentat, en qualitat d'observador, una representació de l'Administració general de l'Estat, als efectes de la qual s'han de notificar electrònicament totes les convocatòries tant a la Delegació del Govern com a la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, en els mateixos terminis que a la resta dels seus membres.

e) Disposar dels projectes de plans de zona en el termini màxim de quatre mesos des de la subscripció del protocol, amb les característiques especificades en el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible, i acreditar que s'ha realitzat el programa de participació pública previst, havent-ne conclòs l'avaluació ambiental amb l'oportuna memòria ambiental conjunta, en el cas que fora preceptiva.

f) Aprovar els plans de zona després d'haver concertat amb l'Administració general de l'Estat els termes de la forma que determina el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible. En cas que els processos de concertació sobre les tres categories d'accions autonòmiques cofinançades, accions dels departaments ministerials, i obres públiques d'interès general, no puguin resoldre's simultàniament, l'aprovació del pla de zona pot ser parcial i pot afectar exclusivament les actuacions sobre les quals s'hagi materialitzat l'acord.

g) Incloure en els projectes de llei de pressupostos de la comunitat autònoma per a l'any 2011 i següents les previsions i dotacions pressupostàries necessàries per poder executar els plans de zona.

5. Mesures de foment en matèria de conservació d'espais naturals

Mitjançant l'Ordre de 5 d'octubre de 2010 s'ha modificat significativament l'Ordre de 26 de setembre de 2009 que establia les bases reguladores de les subvencions per realitzar actuacions de suport a la conservació de les àrees i recursos naturals protegits, i

per contribuir al desenvolupament socioeconòmic dels municipis en espais naturals protegits de Castella-la Manxa (DOCM d'11 octubre de 2010). Aquesta revisió obeeix un triple fi, que la gestió de la mesura sembla haver imposat des que es va aprovar:

En primer lloc, s'ha posat de manifest la necessitat d'incloure entre les actuacions subvencionades en concepte d'“*apoyo a la conservación*” les actuacions dutes a terme en les àrees crítiques d'espècies amb pla de conservació aprovat i que han de comptar amb un mecanisme de suport i cofinançament idèntic, de manera que entre aquestes mesures subvencionables, mentre contribueixin a millorar el medi natural es troben: la xarxa d'àrees protegides (a exclusió dels parcs nacionals); les zones perifèriques de protecció d'espais naturals protegits; les zones sensibles de protecció concertada; les zones de dispersió de l'àguila imperial ibèrica, i les àrees crítiques d'espècies amb pla de conservació.

En segon lloc, s'han inclòs entre els possibles beneficiaris de la línia subvencional de desenvolupament socioeconòmic les entitats locals que tinguin Pla d'Ordenació de Recursos Naturals aprovat en la data de la convocatòria, amb la idea que aquest tipus de planificació comporta determinades limitacions que cal compensar mitjançant suport i cofinançament públic.

En tercer lloc, s'ha corregit el moment que han de considerar-se “iniciadas” les inversions, a fi d'incloure el moment d'iniciació dels treballs de construcció, quan la prestació de serveis s'hagi iniciat, ja que als efectes de la concessió de subvenció ambdós temps revesteixen la mateixa importància.